

Introducción: inteligencia y gobernanza

Han pasado más de cinco años desde la celebración del Primer Congreso Nacional de Inteligencia. Aquel fue un momento importante tanto para la iniciativa de cultura de inteligencia como para los estudios de inteligencia en nuestro país. Durante este período, la oferta de cursos, seminarios y otras actividades académicas se ha incrementado muy notablemente con respecto a entonces. Debemos constatar que, si el primer impulso proporcionado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) fue clave para el despegue de los estudios de inteligencia en España, su labor continúa siendo fundamental en la consolidación del estudio de la inteligencia, en la profesionalización de la inteligencia y en el acercamiento entre los servicios de inteligencia y la sociedad. El hecho de que los resultados obtenidos hasta ahora sean muy positivos no debe ocultar que aún es mucho lo que falta por hacer y consolidar en esta materia en nuestro país, tanto desde el punto de vista de desarrollos internos como en términos de influencia exterior.

Una vez alcanzados los objetivos asociados a la introducción de la inteligencia en el ámbito académico, así como en otros ámbitos de nuestra sociedad, debemos reconocer que todavía no se ha conseguido involucrar de forma regular y comprometida el ámbito del decisor —el de los usuarios de la inteligencia—. Y si la cultura de inteligencia no alcanza dicho ámbito, que es clave, esta pierde una parte fundamental de su razón de ser. El medio del decisor se extiende más allá de los usuarios finales de los productos analíticos. Incluye también a legisladores que toman decisiones sobre el modelo de comunidad de inteligencia y que, a su vez, ejercen un control sobre ella. Comprende también a la sociedad civil, que es la beneficiaria última de la actividad de inteligencia y que igualmente debe ejercer un control indirecto sobre la eficacia del trabajo realizado por las organizaciones integrantes de esa comunidad. La sociedad civil es responsable de conocer el funcionamiento de sus instituciones y también los resultados que estas instituciones

producen o alcanzan en su nombre e interés. Esto nos conduce a sugerir que de la responsabilidad de la acción política forma parte el interesarse por estos temas y apoyar las actividades que contribuyan a su conocimiento. Una democracia consolidada precisa de políticos y también de ciudadanos formados en el conocimiento de sus instituciones, de las que forman parte imprescindible y con pleno derecho los servicios de inteligencia.

Por otra parte, es igualmente preciso subrayar que todos los indudables avances que se han alcanzado en el ámbito académico pierden su razón de ser si existe una desconexión con respecto a las organizaciones empresariales y a las instituciones estatales. Es decir, si entre la praxis de la inteligencia como función en el seno de las organizaciones, de una parte, y la investigación y formación académica, de la otra, existe un vacío. En otras palabras, si, a diferencia de lo que sucede con otras disciplinas, el estudio de la inteligencia se convierte en un mero ejercicio de erudición o de *mercadillo* de ofertas formativas sin un impacto real en el mundo profesional. La transferencia de conocimientos en sentido bidireccional es también un requisito fundamental tanto para fortalecer la profesionalización de la inteligencia como para contribuir a su desarrollo y consolidación como disciplina académica y a su reconocimiento social.

Por otra parte, es preciso recordar que la iniciativa de *cultura de inteligencia* es un proyecto de carácter nacional. Es decir, que su vocación es tejer redes de colaboración entre instituciones académicas a través de toda la geografía española, y a su vez que la comunidad universitaria involucre o haga partícipe de los eventos académicos al resto de la sociedad civil. La cultura de inteligencia se plantea como un proyecto descentralizado. Es por ello que la celebración del tercer congreso haya tenido lugar en la Universidad Autónoma de Barcelona, así como el hecho de que el cuarto congreso vaya a celebrarse en Cádiz en noviembre de 2014. Y en una sociedad de la información, donde uno puede establecer relaciones y comunicarse sin necesidad de la presencia física, consideramos una prioridad celebrar cada dos años un congreso internacional de carácter presencial.

Desde el punto de vista de la comunidad de estudios de inteligencia, los congresos no son eventos puramente estéticos o de simple divulgación, son y deben considerarse ámbitos de intercambio de ideas, de sometimiento de estas a la crítica y a las sugerencias de los pares (*peers*), de presentación de resultados de investigación, de encuentro y de innovación. Igualmente los congresos constituyen actividades académico-profesionales en las que el establecimiento de relaciones, intercambio e interacción interpersonal con colegas y profesionales sirven para favorecer proyectos de carácter común y desencadenar cambios ante lo establecido y avances hacia prácticas más eficaces. Tanto las instituciones públicas como las organizaciones

empresariales han de ser conscientes de la importancia de su participación en estas actividades.

Asimismo, el carácter internacional del congreso obviamente responde, por un lado, a una lógica determinada por la globalización del conocimiento y a un planteamiento que deliberadamente persigue relacionar las mejores prácticas, los avances y las discusiones compartidas por toda la comunidad académica y de inteligencia. Y, aunque cada país y sus modelos de inteligencia traten de responder a las particularidades, amenazas e intereses propios, esto no debe ser la excusa para no reconocer que existen disfunciones que podrían solventarse observando (y aprendiendo) cómo otros han dado respuesta a ciertos problemas o desafíos. Tampoco se nos puede olvidar que ante una sociedad global existen amenazas e intereses compartidos; y que algunas de las respuestas deberían involucrarnos a todos y diseñarse en común.

No podemos ignorar que el carácter sensible del trabajo que realizan los servicios de inteligencia tampoco ha de servir como un pretexto que evite u obstaculice el que la sociedad civil se informe, conozca y debata sobre la multitud de cuestiones relacionadas con estas instituciones que afectan a su seguridad y bienestar. De igual forma, los servicios de inteligencia más avanzados y modernos han entendido que, aunque buena parte de su valor añadido resida en aquella información secreta obtenida mediante determinados procedimientos exclusivos y especiales, la información públicamente accesible desempeña también un papel fundamental. Es decir, no toda la información útil y relevante para un servicio de inteligencia es secreta, y de hecho los análisis elaborados desde organizaciones no estatales pueden ser también sumamente competitivos y servir para contextualizar e, incluso, para contrastar las informaciones y los análisis de los propios servicios.

La disponibilidad pública y casi en tiempo real de información procedente de casi cualquier parte del planeta es un fenómeno incuestionable que supone un desafío para los servicios de inteligencia. Ningún servicio de inteligencia posee la capacidad de procesar ni mucho menos una pequeña parte de toda la información que se genera. Del reconocimiento de estas y otras cuestiones por parte de sus responsables dependen las soluciones y la adaptación de los propios servicios al panorama de seguridad actual, y de que estos sean capaces de aportar verdadero valor añadido. Sería una irresponsabilidad emplear recursos valiosos en actividades que pueden ser ejercidas con rigor científico desde otros ámbitos. Las técnicas analíticas también se han democratizado, y la elaboración de análisis competentes en asuntos de interés ya no es algo exclusivo de los servicios de inteligencia. Esta nueva situación obliga a los servicios de inteligencia a repensar dónde reside la verdadera alma de su valor añadido, de su *know-how* y de su especificidad.

Esto nos lleva a considerar el *Leitmotiv* del congreso: la inteligencia y su relación con la gobernanza democrática. En un mundo caracterizado por la complejidad y la incertidumbre, no es posible tomar decisiones de manera deliberada y responsable sin un análisis previo de la situación, de las opciones y de sus consecuencias. Esto es algo bien sabido, pero que no por ello se traslada como principio de acción a nuestra conducta diaria y modo de trabajar. Las decisiones intuitivas pueden venir motivadas por el conocimiento práctico derivado de años de experiencia. Esto es un activo para cualquier organización que, indudablemente, debe aprovecharse. No obstante, las decisiones intuitivas derivadas de procesos de reconocimiento de patrones fruto de la experiencia también pueden conducir a decisiones erróneas. Pueden originarse discontinuidades eventuales o también deliberadamente anticipadas por sucesos similares diseñados por un adversario para producir sorpresas estratégicas. Que tengamos la experiencia de que algo ha funcionado de una determinada manera en el pasado no implica que siempre vaya a funcionar así en el futuro. Por ello la toma de decisiones ante la incertidumbre y el cambio como norma —el gobierno de la incertidumbre— precisa de herramientas de análisis que transformen las señales que emite el entorno y la información que se genera en inteligencia. El buen gobierno de los asuntos que afectan a nuestras sociedades se encuentra en buena medida mediado por la calidad de la información y del conocimiento que con esta se gesta para que el decisor pueda pasar a la acción. El *buen gobierno* en el sentido amplio del término, incluido el *gobierno corporativo*, necesita del análisis para conocer qué está pasando, qué significa lo que está ocurriendo y cuáles son sus implicaciones. Es decir, de qué manera afecta a nuestros intereses y qué podemos hacer. Es por ello que en inteligencia la labor de contextualizar la información que se posee es una de las funciones determinantes. Aunque la información obtenida proceda de fuentes muy cualificadas, tenga el plus del secreto o se tengan datos en cantidades masivas, estas son cualidades necesarias y valiosas pero no suficientes. Se requiere de marcos analíticos que nos permitan interpretar esa información y esos datos.

El buen gobierno exige un equilibrio entre inteligencia y gobernanza. A su vez, el buen gobierno de la inteligencia demanda instrumentos que faciliten y garanticen que los análisis que se proporcionan estén conducidos por los principios de la objetividad, el pensamiento crítico y el interés común. Los profesionales de la inteligencia deben trabajar en entornos donde se favorezca el pensamiento creativo y el pensamiento crítico tanto como la experiencia y los procesos establecidos. Igualmente, la inteligencia demanda del decisor una actitud activa que facilite el conocimiento de los objetivos y las necesidades, para lo cual se requiere *inputs* analíticos. El peligro de que la inteligencia sea utilizada para legitimar decisiones a

priori de carácter partidista o interesadas siempre estará ahí. Por ello, las democracias tienen que mantenerse alerta ante estos peligros y dotarse de los instrumentos apropiados para contrarrestar o dificultar que esto suceda. La confianza en las instituciones es un principio clave en las democracias, que se gana con los hechos en el día a día. La educación en inteligencia es también un instrumento que debe aprovecharse para solventar estos peligros y para consolidar las democracias. La ignorancia o el desconocimiento también pueden conducir a conductas o preconcepciones inadecuadas con respecto a los servicios de inteligencia por parte del gobernante o del legislador.

Las contribuciones presentadas en el TERCER CONGRESO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA que recoge este volumen se hacen cargo de algunas de las cuestiones centrales que afectan a la inteligencia en su relación con la gobernanza democrática. Dichas contribuciones abordan temas que el lector encontrará de gran interés: los modelos nacionales de cultura de inteligencia (como es el caso italiano), la formación del analista de inteligencia, la inteligencia competitiva, la contrainteligencia o la inteligencia, y los procesos de radicalización.

El papel que han de desempeñar los servicios de inteligencia para favorecer la seguridad, el bienestar de los ciudadanos y la defensa de los valores e instituciones democráticas son cuestiones demasiado importantes para dejarlas únicamente en manos de los gestores de los servicios de inteligencia o de los representantes políticos.

Fernando VELASCO
Rubén ARCOS